

Publicado en el periódico Diagonal el Martes 25 de octubre de 2011 (Número 159)

Estampas políticas vascas

Jakue Pascual - Sociólogo

Los números son contundentes, la duplicidad en gastos que asumen las instituciones vascas asciende a 403 millones. Se excluye de la contabilidad al Gobierno del Estado. Así ocurre que el reconocimiento de la gravedad de los datos, y la voluntad de subsanar el defecto de estructura, no oculta la sospecha de que el planteamiento corrector del Gobierno Vasco se sitúe en línea con las propuestas recentralizadoras de Rosa Díez, Rajoy y Rubalcaba que convergen hacia el adelgazamiento máximo del modelo autonómico y en dar cerrojo a la autonomía municipal.

El Consejo de Gobierno de Lakua aprueba el proyecto de Ley Municipal y no da voz a Bildu, a la mayor fuerza con implantación local de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). La Diputación de Bizkaia anuncia que la recurrirá porque vulnera la Ley del Concierto y la de Territorios Históricos. Los centralistas y autonomistas blindan EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) para que Bildu no acceda a la presidencia.

Confebask califica de "desastre" el reintegro de las "vacaciones fiscales" y reduce la previsión de crecimiento de la CAV hasta el 0,8%. Bildu denuncia que las arcas de Gipuzkoa presentan un desfase de 101 millones. La fusión de las cajas de ahorros de la CAV se acelera. Acuerdo de los tres presidentes de las cajas con Bildu a fin de salvar el escollo de un 'no' en la asamblea de la caja guipuzcoana. "Contrato de Novación". Bildu argumenta que preserva la "función seminal" que evita la privatización y mantiene la obra social, aunque sin despejar los interrogantes derivadas de los usos del mundo bancario.

Errekalde calling. El celo por el derribo del Gaztetxe de Kukutza se escuda en una acérrima salvaguarda del derecho de propiedad acompañada, al mismo tiempo, de una oportuna recalificación de los terrenos y de la pretensión de asestar un golpe mortal al sector antiautoritario vecinal y alternativo. Ares y Azkuna comparten la responsabilidad política del alto grado de violencia ejercido por la Ertzaintza frente a la contundente respuesta popular. Se defienden ellos argumentando que tras el ala vecinal se esconde Bildu. La coalición matiza: "no

estamos tras Kukutza sino a su lado".

Frente al vacío cultural de Errekalde, sedimentado tras varias legislaturas del PNV, la iniciativa popular, el auzolan –trabajo comunitario– y la participación ciudadana habían modelado un espacio multidisciplinar legitimado socialmente y políticamente vía ayudas económicas oficiales. El alto grado de cooperación demostrado por la autogestión había ridiculizado la raquítica oferta de las instituciones. El barrio en estado de sitio. Día de la vergüenza. Bilbo burning.

Dos modelos de política económica contrapuestos despuntan en Euskal Herria. El hegemónico neoliberal promovido y sobredimensionado por las fuerzas estatistas y autonomistas, y el de una incipiente democracia socialista, no conformada más que en sus rudimentos sobre un espacio sociológico soberanista, progresista, de izquierdas y alternativo amplio. La estructura social de Euskal Herria está cambiando y el reflejo de la desregulación se visualiza en los extremos que habitan Neguri o transitan Zababuru, en el incremento del proletariado desclasado, en el volumen que adquiere el trabajo inmaterial cualificado y en una clase media en extinción mitigada por la persistencia momentánea –dado el gusto privado neoliberal al uso– de un inflacionado sector funcionarial.

Aralar se suma a la convergencia de cara al 20N: Amaiur, la mayor acumulación de fuerzas soberanistas vascas de la historia. La Abogacía del Estado contraria a la legalización de Sortu. Sentencia condenatoria por el "Caso Bategune" y rechazo general en Euskal Herria. 'Tuit' de Twitter, "que nadie abandone este camino, porque vamos a ganar". Rufi Etxeberria augura un auténtico choque de trenes político... "Y la voluntad mayoritaria estará obligada a adoptar decisiones unilaterales de soberanía".

Los acontecimientos se suceden. El colectivo de presos políticos vascos EPPK asume el Acuerdo de Gernika. Camacho lo interpreta como "un paso hacia la paz" mientras Rubalcaba constriñe las salidas de los presos en la ley vigente –la simple aplicación del Código Penal excarcelaría amuchos–. Una comisión internacional de expertos comienza la verificación del alto el fuego. ETA emite un comunicado en el que adopta el compromiso de colaborar. Autodisolución de EKIN. "Bases para la unidad, la concordia y la convivencia".

El PSE mueve pieza y plantea el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política sin excepción y condiciona los pasos hacia el acercamiento y la reinserción de los presos al fin de la lucha armada. El Gobierno lo secunda. Zabaleta afirma que la amnistía es "lo normal"

pero Camacho la descarta, así como el "acercamiento masivo" a cárceles vascas. Ardanza desvela que el Pacto de Ajuria acordó que el fin de ETA conllevaría la salida de todos sus presos y Jáuregui lo desautoriza: "lo no escrito no existe". Las partes coinciden en no fijar plazos y en consolidar movimientos. El PP vasco se retrae cauteloso a la espera de directrices. Cospedal acusa al PSOE de hacer la campaña a Bildu y la AVT insiste en su ilegalización.

Bildu, moda social en galerías políticas. La Diputación de Gipuzkoa propone crear una Renta Básica de Ciudadanía "universal e incondicional". El PNV se muestra "radicalmente en contra" y el PSE pide números. La oposición se alía expresando su apoyo al TAV y a la ampliación exterior del puerto de Pasajes frente a la negativa de Bildu. Garitano afirma que la Diputación no impulsará en plena crisis proyectos que "han arruinado económicamente el territorio". Su antecesor en el cargo, Markel Olano, le aconseja no ser arrogante y le tienta para que negocie.

Muchos son los datos que auguran que tras el 20-N se abrirá en el conjunto del Estado una nueva fase político económica más cruda y de mayor conflictividad social. La crisis provocada por la quiebra del sistema especulativo-financiero puede enfrentarse desde dos ópticas radicalmente opuestas: desde una visión colonialista centralizando estructuras y recursos en la metrópolis, o bien diseñando una red que contemple el territorio desde sus relaciones reales.

En un momento donde la acumulación de fuerzas soberanistas se muestra como una alternativa posible –capaz de disputar al nacionalismo autonomista su hegemonía– es una tentación para el Estado desdeñar los movimientos de distensión que se efectúan y mantener el conflicto como elemento de diversión mediática y rentabilidad económica.

Cara o cruz, la suerte está echada. Tras la apertura milimetrada del PSOE en el reconocimiento de una posible solución al conflicto vasco, serán los poderes reales del Estado quienes proyecten su decisión en la pantalla de Rajoy.

Nota aclaratoria:

Hay que tener en cuenta que el artículo está redactado antes de que se anunciara la celebración de la conferencia de paz de Donostia (se entregó el 7 de octubre) y, evidentemente, antes de que ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada; si bien la no inclusión de tan importantes acontecimientos no modifica la conclusión del escrito.